

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ - SECCIÓN TERCERA

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

JUEZ	Magda Cristina Castañeda Parra
Ref. Expediente	110013343-064-2018-00074-00
Demandante	ODALINDA MERCEDES TORRES DE PÉREZ ¹
Demandado	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ² RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA ³ YUMA CONCESIONARIA S.A. ⁴
Llamados en garantía de Yuma	MUNDIAL DE SEGUROS S.A. ⁵ SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. ⁶
Llamado en garantía ANI	YUMA CONCESIONARIA LA PREVISORA S.A. ⁷

I. RESUELVE EXCEPCIONES PREVIAS

Encontrándose el expediente al Despacho sería menester que el Juzgado volviera a fijar fecha para la audiencia inicial, no obstante, es preciso tener en cuenta que tanto el Decreto Legislativo 806 de 2020 como la Ley 2080 de 2021 establecieron nuevas reglas procesales para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entre otras, en lo que tiene que ver con el trámite de las excepciones; por lo que es necesario definir la aplicabilidad de las nuevas disposiciones procesales al caso en concreto.

II. ANTECEDENTES

Con la finalidad de ejercer su derecho de contradicción y defensa, las entidades que conforman el extremo pasivo contestaron la demanda así:

- YUMA CONCESIONARIA S.A.: el 26 y el 29 de octubre de 2018 contestó la demanda dentro del término legal⁸, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por

¹ Correo electrónico: encisoabogados@gmail.com celular 320 306 12 42.

² Correo electrónico: buzonjudicial@ani.gov.co y mcabrera@ani.gov.co.

³ Correo electrónico: msarmiec@deaj.ramajudicial.gov.co y deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co.

⁴ Correo electrónico: notificacionesjudiciales@yuma.com.co.

⁵ Correo electrónico: co-notificacionesjudiciales@mundialcolombia.com y jfelipetorresv@tfdc.co.

⁶ Correo electrónico: notijuridico@suramericana.com.co, notificacionesjudiciales@sura.com.co, carolina.delatorre@tamayoasociados.com y tamayoasociados@tamayoasociados.com.

⁷ Correo electrónico: notificaciones@nga.com.co, jcneira@nga.com.co y ljaramillo@nga.com.co.

⁸ Fls.127-133 y 225-231 c.1.

pasiva y llamó en garantía a Mundial de Seguros S.A., y Seguros Generales Suramericana S.A.

A su vez, Seguros Generales Suramericana S.A., el 21 de enero de 2020 contestó el llamamiento en garantía dentro del término legal⁹ y propuso las excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa por activa.

De igual forma, Compañía Mundial de Seguros S.A., el 16 de enero de 2020 contestó el llamamiento dentro del término legal¹⁰ y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de Yuma Concesionaria S.A.

-. La RAMA JUDICIAL: El 13 de noviembre de 2018 contestó la demanda dentro del término legal¹¹ y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

-. La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI: El 13 de noviembre de 2018 contestó la demanda dentro del término legal¹² y propuso las excepciones de cosa juzgada, falta de legitimación en la causa por pasiva y falta de legitimación en la causa por activa por no presentar prueba de la calidad en la que actúa la demandante; además llamó en garantía a Yuma Concesionaria S.A., y La Previsora S.A.

La llamada en garantía La Previsora S.A., Compañía de Seguros, el 23 de enero de 2020 contestó el llamamiento en garantía dentro del término legal¹³ y propuso las excepciones de ausencia de legitimación material en la causa por activa de la señora Odalinda Mercedes Torres, ausencia de legitimación material en la causa por activa de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y cosa juzgada.

III. CONSIDERACIONES

La versión original de la Ley 1437 de 2011 en su artículo 180 señalaba que en el curso de la audiencia inicial, el juez o Magistrado Ponente resolvería *«sobre las excepciones previas y las [mixtas] de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva»* y, que de requerirse la práctica de pruebas para poder emitir un pronunciamiento al respecto, se suspendería la diligencia para recaudarlas por un término máximo de 10 días, tras el cual se reanudaría la audiencia y se decidiría la respectiva excepción. Así mismo, la norma establecía que el auto que decidiera sobre las excepciones sería susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso.

Éste panorama normativo cambió radicalmente luego de la expedición del Decreto Legislativo 806 de 2020 y de la Ley 2080 de 2021, como pasa a explicarse:

EL TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES EN EL DECRETO LEY 806 DE 2020

⁹ Fls.58-83 c. llamamiento 1.

¹⁰ Fls.107-126 c. llamamiento 1.

¹¹ Fls.232-236 c.1.

¹² Fls.240-253 c.1.

¹³ Fls.28-63 c. llamamiento 3.

El artículo 12 del Decreto Ley 806 de 2020 señaló, que durante los dos años siguientes a su expedición, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo las excepciones se tramitarían de la siguiente manera:

«Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.»

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, en el curso de esta las practicarán. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva. se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente.

La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez; subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable.»
(Subrayado fuera del texto).

EL TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES EN LA LEY 2080 DE 2021

Ahora bien, en lo que respecta al trámite y decisión de las excepciones en el proceso contencioso administrativo, el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, derogó tácitamente el artículo 12 del Decreto Ley 806 de 2020 antes comentado, y de forma expresa, modificó el artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, para agregarle a éste último un segundo párrafo, del siguiente tenor:

«Artículo 175. Contestación de la demanda. Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá:

(...)

Parágrafo 2°. De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la

práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A»

Se insiste, que de acuerdo con la versión original de la Ley 1437 de 2011, artículo 180, numeral 6, las excepciones previas debían ser resueltas en el marco de la audiencia inicial. Pero, a partir de la expedición de la Ley 2080 de 2021, artículo 38, como se ha expuesto, las excepciones previas se decidirán atendiendo al procedimiento establecido en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso, es decir, a través de un auto por escrito, antes de la audiencia inicial.

IV. EL CASO CONCRETO

En el presente asunto, se tiene que en vigencia del texto original de la Ley 1437 de 2011 la demanda que origina la presente causa judicial, fue admitida (fls.93-95), de igual modo se tiene que también en vigencia de la versión original de la norma en comento, las demandadas contestaron el libelo, llamaron en garantía y a su vez, estos, contestaron los llamamientos; la Secretaría del Despacho dio traslado de las excepciones formuladas por el extremo pasivo al contestar la demanda (fls.276 c. 1 y 144 c. llamamiento 1).

Por lo anterior, como quiera que en el proceso de la referencia lo que sigue es la fijación de fecha y hora para la realización de la audiencia inicial, y que no hay términos corriendo, ni trámite o diligencia alguna iniciada que esté pendiente de resolución, al sub judice son perfectamente aplicables las normas de índole procesal previstas en la Ley 2080 de 2021, según el principio del efecto general inmediato consagrado en el régimen de vigencia y transición de dicha ley.

Bajo ese parámetro corresponde al Despacho resolver las excepciones previas propuestas por los demandados y sus llamados en garantía, antes de la audiencia inicial, a través de auto por escrito, en aplicación de las nuevas reglas procesales señaladas en la Ley 2080 de 2021.

Estudio de las excepciones previas en el caso concreto

Para efectos de claridad en el estudio y análisis de las diversas excepciones planteadas tanto por las demandadas como por sus llamados en garantía, se presentarán primero los medios exceptivos propuestos por cada extremo pasivo, luego el del llamado en

garantía y, finalmente, para la resolución de cada punto, se agruparán de acuerdo a su naturaleza.

- Excepciones propuestas por la Sociedad Yuma Concesionaria S.A.

A folio 128 reverso c.1, en la contestación de la demanda propuso la excepción que denominó **falta de legitimación en la causa**.

Adujo, en sustento del medio exceptivo que no es cierto en modo alguno lo aducido por la parte demandante dentro de su escrito, al aseverar que la Sociedad Yuma Concesionaria S.A. debió adelantar los trámites de enajenación voluntaria y posterior expropiación judicial dirigiéndose a la señora Odalinda, toda vez que conforme a lo anteriormente referido y explicado, al momento del requerimiento del predio, que conllevó el levantamiento de insumos prediales, la señora demandante no figuraba como titular del derecho real de dominio del inmueble, ni como acreedora de limitación al dominio, medida cautelar o gravamen alguno que recayera sobre el predio, lo cual tampoco ocurre a la fecha, motivo por el cual la Sociedad Yuma Concesionaria S.A., procedió con el trámite de formulación de oferta formal de compra y todo lo posterior, conforme a lo reglado en el artículo 4 de la Ley 1742 de 2014 – Ley de infraestructura...

Así las cosas y habiéndose surtido el trámite de enajenación voluntaria con plena observancia de los requisitos de ley, no encuentra el suscrito motivo alguno que sustente lo manifestado por la parte actora frente a la violación de derechos que no tenía sobre el predio al momento del requerimiento manifestado por la Agencia Nacional de Infraestructura. Como soporte de ello, se allegó junto con la demanda de expropiación, el folio de matrícula inmobiliaria del bien a expropiar actualizado a la fecha del requerimiento, en el que se evidencia que la titularidad del derecho real de dominio recaía sobre el señor José Manuel Hernández González.

Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta que la señora Odalinda manifiesta haber adquirido un predio mediante sentencia de un proceso declarativo de pertenencia, resulta pertinente indicar que la fecha en la que manifiesta la supuesta adquisición predial data del mes de noviembre del año 2016, siendo esto siete (7) meses posterior a la sentencia que decretó la expropiación judicial a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, proferida en el mes de abril del mismo año; esto sin mencionar que en realidad no existe claridad ni certeza de que se trate de parte del mismo predio, toda vez que los linderos mencionados por la señora Odalinda al decir que su predio se encontraba separado del de propiedad del señor Hernández por el Río Anime, no coinciden con los contenidos en los insumos prediales levantados por la Sociedad Yuma Concesionaria S.A. y que hacen parte de los actos administrativos correspondientes (oferta formal de compra y resolución de expropiación) ni en las escrituras del predio en cuestión, los cuales a la fecha gozan de presunción de legalidad, no han sido revocados por la ANI, ni declarados nulos por autoridad judicial competente.

Trajo a colación igualmente la parte demandada el contenido del numeral 11 del artículo 399 de la Ley 1564 de 2012, manifestando que la norma es clara en regular contra quiénes debe dirigirse la demanda de expropiación judicial y al no contar la señora Odalinda con ninguna de las características en este aparte mencionadas, habría resultado improcedente e incorrecto por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI vincularla a un proceso en el que nada tenía que ver. Adicionalmente, en el numeral once (11) también citado se hace alusión al incidente de oposición que pudo ser promovido por la señora Odalinda dentro del proceso de expropiación judicial que se adelantaba en contra del señor Hernández, no habiéndose surtido este y en su lugar, habiendo interpuesto un incidente de nulidad contra la diligencia de entrega anticipada llevada a cabo el 4 de diciembre de 2015, incidente cuya resolución fue debidamente motivada dentro de la sentencia de expropiación del 13 de abril de 2016, en la que se decidió rechazarlo de plano; motivo por el cual no se encuentra sustento alguno frente a la supuesta vulneración de derechos a la señora Odalinda por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, la Sociedad Yuma Concesionaria S.A. ni el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná, toda vez que la solicitudes e inquietudes manifestadas fueron resueltas a cabalidad con los pertinentes argumentos que acreditan la legalidad y transparencia de la que se revisó en todo momento tanto el trámite de enajenación voluntaria como el proceso de expropiación judicial.

Posteriormente, citó el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 y un aparte jurisprudencial de una sentencia del Consejo de Estado para afirmar que como quiera que no ha sido acreditada la legitimación por activa de la parte demandante, y por consiguiente la legitimación por pasiva de la parte demandada, al evidenciarse que no fueron vulnerados de modo alguno los derechos de la señora Odalinda dentro del trámite de adquisición predial que adelantó la Sociedad Yuma Concesionaria S.A., para la Agencia Nacional de Infraestructura, toda vez que no existe evidencia que sustente la autoproclamada titularidad del predio expropiado, ni la existencia de derecho alguno sobre el mismo por parte de la demandante, resulta equívoco dar trámite a un proceso dentro del que ninguna de las partes se encuentra legitimada y por lo tanto, ninguna de las mismas se encuentra legalmente llamada, a reparar, en el caso de la parte demandada, ni a exigir una indemnización, en caso de la parte demandante.

- Excepciones propuestas por la llamada en garantía de la Sociedad Yuma Concesionaria S.A., Seguros Generales Suramericana S.A.

Esta llamada en garantía propuso las siguientes excepciones:

Caducidad

Basada en el numeral 11 del artículo 399 del CGP, indicó que quien se considere poseedor de un bien que está siendo objeto de un proceso de expropiación judicial, debe presentar oposición en el desarrollo de la diligencia e incidente para demostrar su calidad y calcular su indemnización, dentro de los 10 días siguientes.

Advirtió que en el presente caso, tal como se evidencia a folio 198 del expediente, la señora Odalinda Mercedes Torres hizo presencia el día 4 de diciembre de 2015 en la diligencia de entrega anticipada del predio, dentro del proceso de expropiación adelantado por la Agencia Nacional de Infraestructura en contra del señor José Manuel Hernández González, proceso identificado con radicado 2015-00085-00 del Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná (Cesar).

Consciente de lo anterior, la demandante podía iniciar incidente para demostrar su derecho y calcular su indemnización dentro del proceso de expropiación ya iniciado hasta el 12 de enero de 2016, pero no lo hizo.

El importante reiterar que el bien sobre el cual versó el trámite de expropiación adelantado por la ANI en contra del señor José Manuel Hernández González y el bien sobre el cual se declaró la adquisición por usucapión a favor de la señora Odalinda Mercedes Torres son diferentes... sin embargo, aun cuando la demandante insistiera en haber ejercido posesión sobre el bien que fue expropiado, la oportunidad que la ley le otorga para demostrar su derecho no fue ejercida, por lo que se ha materializado la caducidad...

...resulta irrelevante que la señora Odalinda Mercedes Torres haya sido declarada propietaria por usucapión sobre un bien distinto que el que fue expropiado al señor José Manuel Hernández; si aquella, hipotéticamente, ostentaba una posesión respecto de al menos una porción del bien que fue objeto de expropiación, dicha situación quedó subsanada por su omisión, al no haber indicado dentro del término y en el proceso, el incidente para demostrar su condición de poseedora y realizar la tasación de la indemnización correspondiente.

Al no haber hecho uso del mecanismo procesal indicado para demostrar su condición de poseedora y, demostrar la posesión, reclamar la indemnización proporcional correspondiente, ha operado el fenómeno de la caducidad y, en consecuencia, no es posible para la demandante iniciar acciones diferentes para revivir un término precluido.

Falta de legitimación en la causa por activa

En sustento del medio exceptivo señalado, arguyó que la señora Odalinda Mercedes Torres interpone la demanda aduciendo ser propietario de un bien inmueble que se expropió sin una indemnización previa, como lo exige la norma. Sin embargo, el predio frente al cual se llevó a cabo el trámite de expropiación por parte de la ANI y en contra del señor José Manuel Hernández es completamente diferente del bien que fue adquirido, siete meses después de la expropiación, por la señora Odalinda; así las cosas, es necesario concluir que la demandante, no es, ni era propietaria de la franja de terreno que fue objeto de expropiación, por lo que no puede, ni podía, ser sujeto pasivo de la indemnización previa que reclama mediante este proceso.

- Excepciones propuestas por la llamada en garantía de la Sociedad Yuma Concesionaria S.A., Compañía Mundial de Seguros S.A.

Esta llamada en garantía propuso la siguiente excepción:

Falta de legitimación en la causa por pasiva de Yuma Concesionaria S.A.

Sostuvo que Yuma Concesionaria S.A. carece de legitimación en la causa por pasiva por cuanto no tiene facultades legales para adelantar procesos de expropiación administrativos ni judiciales, por lo cual no es dable ni procedente que se le vincule al presente proceso judicial, ni mucho menos que se le endilgue responsabilidad por actuaciones ajenas.

Quien presentó la demanda de expropiación que, según la parte actora, ocasionó los perjuicios a la señora Odalinda, fue la Agencia Nacional de Infraestructura; por lo anterior, queda plenamente evidenciado que no existe entonces legitimación en la causa por pasiva de Yuma Concesionaria S.A., por los hechos que hoy son objeto de análisis por el juzgado.

- Excepciones propuestas por la Rama Judicial

A folio 235 reverso c.1, en la contestación de la demanda propuso la excepción que denominó **falta de legitimación en la causa por pasiva**.

Sustentó el medio exceptivo en los siguientes términos:

Ahora, frente la presente demanda de Reparación Directa con radicación 20180007400, y según los hechos de la misma, en especial el hecho 10 que señala que mi representada entre otras entidades NO ‘realizaron negociación con la hoy demandante y tampoco efectuaron la respectiva indemnización

previa y justa a favor de la propietaria...’ Si se tiene que es la única referencia que hace de mi representada y en las pretensión solo se limita a que estas entidades incluida la Nación Rama Judicial no indemnizaron previamente a la hoy demandante, se presenta FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA frente a la Nación Rama Judicial por cuanto no es la entidad competente, ni está en cabeza de la misma efectuar pago alguno sea en calidad de compraventa o indemnizatorio en los casos de declararse la extinción del dominio.

- Excepciones propuestas por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

A folios 245 reverso a 248 c.1, en la contestación de la demanda propuso la excepciones que denominó: **cosa juzgada, falta de legitimación en la causa por pasiva de la ANI y falta de legitimación en la causa por activa porque no se presentó prueba de la calidad en que actúa la demandante.**

Cosa juzgada

Argumentó al respecto que la parte demandante pretende que se paguen los perjuicios derivados de la enajenación de un inmueble.

Argumentó que esa enajenación se dio a través de un proceso judicial de expropiación a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura y aseguró que las sumas correspondientes al valor del predio y las indemnizaciones que de conformidad con la ley procedía, le debieron ser pagadas a ella y no al señor Hernández González.

En efecto. Tal como lo afirmó la demandante, el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná tramitó y resolvió de fondo el proceso de expropiación No. 2015-00085, que se refirió al predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 192-11026 y la ficha predial 1NDB0139 cuyo titular del derecho de dominio era José Manuel Hernández González, y que resultó expropiado en favor de la Agencia.

Igualmente, como lo afirmó la demandante en el hecho 6 del libelo, ella conoció de la existencia de ese proceso judicial de expropiación, incluso intervino en ese proceso a través de su apoderado judicial, que formuló incidente de nulidad contra la diligencia de entrega anticipada alegando que el predio era de su propiedad, tal como consta en el acta del 13 de abril de 2016 “para proferir fallo dentro del proceso de expropiación.”

De manera que entre la demandante ya pretendió el reconocimiento y pago de las sumas que pretende le sean reconocidas con esta demanda, o sea, el valor del inmueble y los perjuicios derivados de su enajenación en favor del Estado.

En efecto. Agencia Nacional de Infraestructura interpuso esa demanda de expropiación en la que se debatió la titularidad del derecho de dominio que, de conformidad con las pruebas aportadas, el juez encontró que era José Manuel Hernández González.

A pesar de la oposición de Odalinda Mercedes Torres de Pérez mediante su apoderado, a esa situación, el juez de la expropiación mediante sentencia de fondo denegó sus alegaciones y decretó la expropiación a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura, del predio de José Manuel Hernández González.

También se debatió y resolvió de fondo en ese proceso el valor del inmueble y de los perjuicios que debían ser pagados al titular del derecho de dominio como consecuencia de la expropiación, lo mismo que pretende la demandante en esta Litis.

De manera que en ese proceso de expropiación se debatieron todos los aspectos que la demandante en este asunto busca le sean reconocidos ahora a través del medio de control de reparación directa, es decir, lo relacionado con todos los valores que la Agencia Nacional de Infraestructura debió pagar al propietario por esa enajenación, en los términos de la sentencia y de la normativa vigente para entonces, incluso las indemnizaciones que le correspondían.

De manera que no es procedente que ahora se desconozca la existencia de esa sentencia ejecutoriada y se pretenda a través de este medio de control el reconocimiento de las pretensiones a las que legalmente tenía derecho el demandante.

Falta de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia Nacional de Infraestructura

Argumentó que de la lectura de la demanda se entiende que la parte demandante pretende que se le indemnice por los perjuicios que le fueron causados como consecuencia de la expropiación judicial de un predio. Frente a este asunto, la Agencia Nacional de Infraestructura no tiene injerencia alguna: dentro de las funciones y objeto de la Agencia establecidas en el Decreto 4165 de 2011, no se encuentran de manera expresa e inequívoca la de ejecutar la gestión predial, pues la ANI se encarga de la administración de los contratos de concesión mediante los cuales el concesionario obtiene una remuneración por la materialización de unos proyectos de infraestructura, siendo este último el ejecutor directo de tales proyectos, además quien los mantiene y debe señalar.

En el hipotético caso que se logre demostrar que con ocasión de la ejecución del proyecto vial Ruta del Sol Sector 3, se ocasionó algún tipo de perjuicio a la parte demandante en el presente proceso, el llamado a responder es el ejecutor de la vía, vale decir, el concesionario Yuma Concesionaria S.A.

Para estos efectos citó el objeto del contrato de concesión 007 de 2010 sección 1.02 y la sección 2.2 relacionada con las obligaciones del concesionario a la gestión predial del proyecto, para concluir que por virtud de la ley y del contrato de concesión, el concesionario asumió la responsabilidad de la gestión predial, así como la responsabilidad de los daños que se causen a terceros por la ejecución del contrato, y en caso de una eventual condena, esta solo puede ir dirigida en contra del titular de la obligación.

En consecuencia, solicitó declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto no existe obligación legal, ni contractual, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura frente a los supuestos daños demandados por los accionantes.

Adicional a lo anterior, para reforzar su defensa, respecto de una hipotética imputación por una presunta falla en las obligaciones de vigilancia del contrato de concesión, conforme lo pactado expresamente en el contrato, advirtió que existe falta de legitimación de hecho de la ANI, en atención a que la parte demandante no formuló imputaciones específicas y expresas de actuaciones u omisiones de la Agencia como

entidad contratante y que tenga relación directa con las obligaciones asumidas en el contrato de concesión.

Insistió en que la Agencia Nacional de Infraestructura no ocasionó el daño que alega la parte actor por acción u omisión de su parte, por cuanto, si bien en la demanda se convoca a la ANI como extremo pasivo del asunto, en la relación fáctica en que se fundamenta la demanda no aparece imputación o hecho concreto atribuido a la entidad.

En cuanto a la sentencia que ordenó la expropiación en muy clara también la falta de legitimación en la causa de la Agencia Nacional de Infraestructura; la demandante adujo que la indemnización decretada en la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná el 13 de abril de 2016, no debió ser pagada al señor Hernández González como lo ordenó la sentencia por ser el titular de dominio, sino a ella por ser la verdadera propietaria del inmueble.

De haber existido error en el trámite o sentencia del proceso judicial de expropiación, en el que el demandante intervino, no pudo ser la Agencia Nacional de Infraestructura la que realizó la acción u omisión que pueda ser constitutiva de esa falla del servicio, la cual, es inexistente. Tan consciente es la demandante de esa situación que presentó la demanda contra el Consejo Superior de la Judicatura.

Concluyó señalando que dentro de las funciones legales de la Agencia no se encuentra la de proferir sentencia de expropiación, ya que, de conformidad con la Constitución, esa función corresponde única y exclusivamente a los jueces de la República.

Falta de legitimación en la causa por activa y no se presentó la prueba de la calidad en que actúa la demandante

Con base en el numeral 6° del artículo 100 del CGP afirmó que la demandante no aportó elemento probatorio alguno que acredite su legitimación en la causa por activa.

La señora Torres de Pérez alega ser la titular del derecho de dominio del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 192-11026 y la ficha predial 1NDB0139.

Sin embargo, advirtió que la acreditación de este requisito en este caso se da a través de la inscripción en el certificado de libertad y tradición, documento en el que para el lapso comprendido entre la presentación de la demanda de expropiación y su sentencia, figuraba únicamente José Manuel Hernández González.

De otra parte, Odalinda Mercedes Torres de Pérez no aportó documento alguno que permita inferir que era la titular del derecho de dominio de ese inmueble.

Concluyó afirmando que lo anterior es suficiente para que se declare probada esta excepción.

- Excepciones propuestas por la llamada en garantía de la Agencia Nacional de Infraestructura, La Previsora S.A., Compañía de Seguros.

Cosa juzgada

A juicio de esta llamada en garantía, la parte demandante parece desconocer que este asunto ya fue resuelto en un proceso anterior, es decir, operó la figura de la cosa juzgada.

Aludió a que en el proceso No. 2015-085 que conocía el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguana se ventilaron y resolvieron las controversias relacionadas con el predio en cuestión.

En dicha oportunidad se estudió la expropiación judicial del inmueble identificado bajo el número de matrícula 192-11026. Fue por esto que en dicho proceso se declaró judicialmente la expropiación del bien inmueble mencionado, de propiedad del señor José Manuel Hernández González, inmueble que en nada tiene que ver la demandante y, por consiguiente, es absolutamente improcedente su pretensión de indemnización por una expropiación judicial que en nada le atañe.

Citó el artículo 303 del CGP junto con diversa jurisprudencia, para advertir que para que se hable de cosa juzgada deben reunirse los siguientes tres elementos: igualdad de sujetos, igualdad de objeto e igualdad de causa.

Advirtió que existe igualdad de sujetos y esto se desprende precisamente de la participación tanto de la demandante como de la Agencia Nacional de Infraestructura en el proceso 2015-085 que cursó en el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguana.

Respecto de la identidad de objeto, es evidente que se mantiene, pues lo que busca la señora Odalinda Mercedes Torres es que la Agencia Nacional de Infraestructura asuma el reconocimiento de una indemnización con ocasión de la enajenación dada del inmueble identificado con número de matrícula 192-11026, la cual se dio a través del proceso de expropiación; indemnización que no es procedente pues la demandante no figura como titular del derecho de dominio del bien en cuestión.

Por último, respecto de la identidad de causa, también se evidencia, toda vez que la señora Odalinda Mercedes Torres pretende que la ANI le pague, con ocasión de una expropiación judicial, la supuesta indemnización a la que tiene derecho por ser titular del derecho de dominio del predio expropiado. Es decir, se mantiene incólume el hecho jurídico que motivó la intervención de la demandante en el proceso 2015-085.

Ausencia de legitimación material en la causa por activa de la señora Odalinda Mercedes Torres

Expresó que basta analizar el acervo probatorio allegado con la demanda para concluir que la señora Odalinda Mercedes Torres carece absolutamente de legitimación en la causa por activa para iniciar el presente medio de control, toda vez que no era la titular del derecho de dominio del bien inmueble que fue objeto de expropiación y, como consecuencia de ello no le asiste a las demandadas asumir una indemnización a la cual no tiene derecho.

Del folio de matrícula inmobiliaria aportado con la demanda se puede establecer la clara confusión que tiene la demandante. Efectivamente la señora Odalinda Torres es titular del bien inmueble identificado con el número de matrícula inmobiliaria 192-9502, inmueble que fue adquirido a través del modo de prescripción extraordinaria.

Ahora, la misma demandante aporta con su demanda la sentencia de expropiación proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná, mediante la cual se declaró la expropiación del bien inmueble identificado con el número de matrícula inmobiliaria 192-11026, de propiedad del señor José Manuel Hernández González, inmueble que en nada tiene que ver la demandante y, por consiguiente, es absolutamente improcedente su pretensión de indemnización por una expropiación judicial que en nada le atañe.

Advirtió que la demandante alega ser la propietaria del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 192-11026, sin embargo, no obra en el expediente material probatorio alguno que permita concluir tal calidad y, como consecuencia de ello, brilla por su ausencia la legitimación de esta para incoar la demanda que hoy nos convoca.

Ausencia de legitimación material en la causa por pasiva de la Agencia Nacional de Infraestructura

Los argumentos expuestos por la llamada en garantía en sustento de este medio exceptivo son similares a los esgrimidos por la Agencia Nacional de Infraestructura al sustentar la misma excepción cuando contestó la demanda, por lo anterior, el Despacho no los reiterará en este acápite.

Pronunciamiento del Despacho

En resumen: las entidades que componen el extremo pasivo en el presente asunto y sus llamados en garantía, en sus contestaciones, propusieron los siguientes medios exceptivos:

- Yuma Concesionaria S.A.: falta de legitimación en la causa.

Llamada en garantía Seguros Generales Suramericana S.A.: caducidad y falta de legitimación en la causa por activa.

Llamada en garantía Compañía Mundial de Seguros S.A.: falta de legitimación en la causa por pasiva de Yuma Concesionaria S.A.

- Rama Judicial: falta de legitimación en la causa por pasiva.

- Agencia Nacional de Infraestructura – ANI: cosa juzgada, falta de legitimación en la causa por pasiva y falta de legitimación en la causa por activa.

Llamada en garantía La Previsora S.A., Compañía de Seguros: cosa juzgada, ausencia de legitimación material en la causa por activa de la señora Odalinda Mercedes Torres de Pérez y ausencia de legitimación material en la causa por pasiva de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Para efectos de resolver cada uno de las excepciones propuestas, se agruparán por su naturaleza y se hará por parte del Despacho un solo pronunciamiento al respecto.

- Falta de legitimación en la causa por pasiva y por activa

Esta excepción fue propuesta por la parte demandada Sociedad Yuma Concesionaria S.A., y sus llamados en garantía Seguros Generales Suramericana S.A. y Compañía Mundial de Seguros S.A.; por la parte demandada Rama Judicial y la demandada Agencia Nacional de Infraestructura, así como por su llamada en garantía La Previsora Compañía de Seguros S.A.

Al respecto el Despacho encuentra que el Consejo de Estado ha establecido que ***“la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante -legitimado en la causa de hecho por activa- y demandado -legitimado en la causa de hecho por pasiva- y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño...por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra.”***¹⁴ (se resalta y subraya)

El Despacho observa que los argumentos planteados por todas las entidades que componen el extremo pasivo y sus llamados en garantía, en sustento de estas excepciones previas, se encuentran encaminados a desvirtuar la legitimación en la causa material tanto activa como pasiva, entendida como la efectiva participación o no en los hechos que generaron los presuntos perjuicios reclamados por la parte demandante y si el extremo activo reúne las condiciones materiales para pretender la indemnización que persigue en el presente caso; asuntos que corresponderá abordar al momento de proferir sentencia, verificando el material probatorio recaudado, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto se declarará **IMPRÓSPERAS Y NO PROBADAS** las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y por activa propuestas por la parte demandada: Sociedad Yuma Concesionaria S.A., y sus llamados en garantía Seguros Generales Suramericana S.A. y Compañía Mundial de Seguros S.A.; por la Rama Judicial y la Agencia Nacional de Infraestructura, así como por su llamada en garantía La Previsora Compañía de Seguros S.A.

¹⁴ Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de febrero de 2010. Radicación número: 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720). C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

- Caducidad

Esta excepción fue propuesta por la llamada en garantía Seguros Generales Suramericana S.A.

A este respecto el Despacho reitera el análisis expuesto en el auto de fecha 7 de junio de 2018 con el cual se admitió la demanda.

Dado que en el presente caso se trata de una indemnización de daños causados a la demandante por causa de la expropiación del predio desconociendo presuntamente sus derechos como propietaria, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente a la fecha en que se profirió la sentencia de expropiación.

A folios 17 a 22 se encuentra el acta de la audiencia en la que se profirió el respectivo fallo, de fecha 13 de abril de 2016.

De este modo, el término de caducidad se empieza a contar desde el jueves 14 de abril de 2016 y hasta el lunes 16 de abril de 2018.

A folio 80 se encuentra el acta de reparto en la cual se indica que la fecha de radicación de la demanda fue el día 12 de marzo de 2018, de lo que se concluye que el presente medio de control se activó oportunamente, incluso sin tener en cuenta el lapso en que el término de caducidad estuvo suspendido por el trámite de la conciliación prejudicial.

En mérito de lo expuesto se declarará **IMPRÓSPERA Y NO PROBADA** la excepción de caducidad propuestas por la llamada en garantía Seguros Generales Suramericana S.A.

- Cosa juzgada

Esta excepción fue propuesta por la parte demandada Agencia Nacional de Infraestructura, así como por su llamada en garantía La Previsora Compañía de Seguros S.A.

Sobre los planteamientos hechos por la demandada y su llamada en garantía, la Ley 1437 en el inciso 3° del artículo 189 el cual establece:

“...La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya identidad jurídica de partes.” (Se resalta)

A su vez, el artículo 303 del CGP establece:

“ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes...”

Ha enseñado la jurisprudencia del Consejo de Estado que la cosa juzgada es una institución de naturaleza procesal, en virtud de la cual los asuntos respecto de los que

exista una decisión ejecutoriada, no pueden volver a ser ventilados ante la jurisdicción, que en caso de encontrarse acreditada debe ser decretada, incluso de oficio, teniendo por efecto la terminación del proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la cosa Juzgada se estructura a partir de dos premisas, una objetiva relacionada con el objeto y la causa de la controversia, y otra subjetiva relativa a los sujetos que intervienen en un proceso.

De este modo, para que opere la figura de la cosa juzgada, además de la identidad jurídica entre las partes, **debe coincidir entre los procesos el mismo objeto y la misma causa**, lo cual significa que la discusión se circunscribe al asunto sobre el que versó el debate y las razones que se tienen para sustentar las pretensiones.

Al verificar estos tres aspectos legalmente exigidos para predicar la presencia de la figura de la cosa juzgada se encuentra que no está presente la identidad de objeto, por cuanto el objeto del primer proceso, es decir, el 2015-00085 era la expropiación judicial de un predio a efectos del desarrollo de un proyecto vial, lo cual no coincide con el objeto del presente medio de control (2018-00074), el cual está relacionado con la responsabilidad extracontractual de las entidades demandadas por la expropiación del bien inmueble y su consecuente condena al pago de los perjuicios.

Dicho de otro modo, el presente medio de control no versa sobre las mismas pretensiones materiales o inmateriales del proceso 2015-00085. La pretensión de este último era la expropiación judicial de un bien inmueble, en el proceso actual, tiene que ver con el reconocimiento de perjuicios a raíz de la expropiación. En gracia de discusión, los dos procesos tienen guardan relación con la expropiación de un bien inmueble, pero, se insiste, las pretensiones de uno y otro son diferentes.

La causa petendi tampoco coincide, se observa que la demanda actual y la de expropiación no tienen los mismos fundamentos o hechos como sustento. El primer proceso tiene que ver, como se dijo, con la expropiación judicial de un bien inmueble para el desarrollo de un proyecto de infraestructura vial; el medio de control sub judice obedece al reconocimiento de unos presuntos perjuicios a raíz de la expropiación del bien inmueble.

Así, al no estar presente estos elementos, no puede predicarse la existencia de la cosa juzgada. No obstante poderse evidenciar la identidad de partes.

Por las razones expuestas **SE DECLARA NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA** planteada por la parte demandada Agencia Nacional de Infraestructura, así como por su llamada en garantía La Previsora Compañía de Seguros S.A.

Por lo anterior el Despacho,

RESUELVE

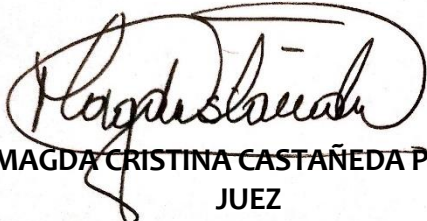
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA E IMPRÓSPERA la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva y por activa propuesta por la parte demandada Sociedad Yuma Concesionaria S.A., y sus llamados en garantía Seguros Generales Suramericana S.A. y Compañía Mundial de Seguros S.A.; por la parte demandada Rama Judicial y Agencia Nacional de Infraestructura, así como por su llamada en garantía La Previsora Compañía de Seguros S.A.

SEGUNDO: DECLARAR IMPRÓSPERA y NO PROBRADA la excepción de caducidad propuesta por la llamada en garantía Seguros Generales Suramericana S.A.

TERCERO: DECLARAR IMPRÓSPERA y NO PROBADA la excepción de cosa juzgada propuesta por la parte demandada Agencia Nacional de Infraestructura, así como por su llamada en garantía La Previsora Compañía de Seguros S.A.

CUARTO: Una vez en firme la presente providencia **ingrésese** el expediente al Despacho para fijar fecha y hora de audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



MAGDA CRISTINA CASTAÑEDA PARRA
JUEZ

CASZ